

POSICIONAMIENTO DE SESPAS

LA RESPUESTA A LA COVID-19 DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEBE BASARSE EN LA CIENCIA Y LA COOPERACIÓN CON LAS DEMÁS AUTORIDADES SANITARIAS.

En las últimas semanas de esta segunda ola de la pandemia, los datos en España de incidencia de contagios, hospitalizaciones, ingresados en UCI y fallecidos por la COVID-19 se encuentran a la cabeza de Europa y aún del mundo y siguen siendo muy altos. A pesar de este preocupante balance de resultados, persiste una inadecuada coordinación entre las distintas Administraciones Sanitarias que dificulta la gestión de la pandemia en nuestro país.

Deslealtad institucional y politización de la gestión de la pandemia, y constantes cambios en los protocolos de actuación conllevan desafección de la ciudadanía, agotamiento de los profesionales y una menor efectividad de las medidas de prevención y control

Todas las autoridades, estatales y autonómicas, deberían coordinarse evitando el conflicto. Es necesario observar principios esenciales de buen gobierno, como la lealtad institucional. El Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe ser el órgano donde se fije la coordinación entre una necesaria estrategia nacional y las estrategias más específicas de cada territorio. También el foro en torno al cual se alcancen los consensos científicos para la adopción de planes de contingencia y medidas generales y la fijación de criterios que orienten y sincronicen las decisiones de los gobiernos autonómicos.

Además, con el fin de hacer posible la cooperación, los responsables políticos con competencias de salud pública no deben condicionar políticamente una respuesta a la pandemia desde el ámbito técnico, convirtiéndola en arma arrojadiza de los que entiende son sus intereses electorales y contra otras instancias de gobierno. Como acaba de indicar el Director General de la Organización Mundial de la Salud, utilizar la pandemia con fines políticos es una vía al fracaso. La ausencia de ética en esta estrategia política es palmaria.

Más aún, tanto la descoordinación entre las instituciones públicas, como la politización de actuaciones de carácter técnico generan desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades sanitarias y a hacia el propio sistema de salud y sus profesionales, pérdida de credibilidad de las políticas de respuesta a la pandemia y, en general, de las políticas de salud. Ante esta falta de credibilidad, la unificación y consenso en la actuación sanitaria, las conductas preventivas, individuales y sociales, se resienten y pierden efectividad de cara al control de la pandemia. En la gestión de la segunda ola, los continuos vaivenes, conflictos y contradicciones que protagonizan las autoridades públicas están confundiendo a la población. Necesitamos una política de respuesta a la pandemia nacional y autonómica, seria, articulada y coherente, que oriente

inequívocamente a la ciudadanía hacia conductas responsables de prevención y protección frente a la COVID-19 y fortalezca y facilite la labor de los profesionales.

Respuesta territorial a la pandemia en base a criterios científicos y racionales: atendiendo a las capacidades disponibles, con un plan articulado y sólido de actuación, así como medidas efectivas e intensas de prevención/control

Resulta imprescindible una planificación racional según los principios de la epidemiología generalmente aceptados, un plan de contingencia marco común, especialmente de la vigilancia y detección de contactos, seguimiento, análisis, diagnóstico y aislamiento de contagiados. Y también de los recursos destinados al control de la pandemia, basados en esta racionalidad y no en medidas de cara a la galería, sin efectividad ni criterio. Algunas autoridades sanitarias toman decisiones apartadas de estos principios y, en general, de la ciencia; no se basan en las pruebas científicas y no cuentan con el aval de los expertos. No se está aprovechando la alta capacidad científica y tecnológica de que se dispone en los diferentes territorios. No solo se ignora el criterio de los propios expertos pertenecientes a la Administración Sanitaria, sino que se rechaza la constitución de comités científicos de apoyo para incorporar este potencial a la gestión de la pandemia. Este desprecio de las capacidades disponibles ha supuesto el agotamiento de los profesionales asistenciales que están soportando esta situación en primera línea sin ser escuchados, y la dimisión de responsables y gestores, que han elegido su honestidad profesional frente a la implementación de decisiones tomadas al margen de la evidencia científica y con lo que parecen criterios de interés partidista.

Resulta fundamental en la planificación ante la pandemia la prevención comunitaria que genere reciprocidad y facilite la ayuda mutua al tiempo que refuerce la confianza tanto en los decisores políticos como en el propio sistema de salud.

Desde la resiliencia comunitaria se puede hacer frente de manera mucho más eficaz a situaciones tan graves como la COVID 19, al movilizar y vertebrar el conocimiento local, los recursos comunitarios, los activos para la salud que permitan una eficaz organización y desarrollo comunitario de manera coordinada con profesionales y técnicos, ya que nadie mejor que la propia comunidad conoce el contexto y su implicación en las intervenciones desarrolladas contribuirían a potenciar los servicios públicos con criterios de equidad.

La participación comunitaria ejerce un importante y necesario efecto en el empoderamiento de la población que contribuiría a la adhesión, seguimiento y control eficaz de las medidas de seguridad y prevención en contraposición a las medidas individuales y patologizantes. Se debe huir de soluciones individuales, medicalizadas y patologizantes de los procesos, que permita un afrontamiento colectivo integral e integrado.

No es comprensible ni justificable que hasta la fecha no se haya llevado a cabo, más aún cuando organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), ponen de manifiesto e insisten en su oportunidad y necesidad.

Las consecuencias de estos comportamientos son graves. Para evitarlas, deben darse respuestas adecuadas a la situación que se vive en cada territorio, partiendo de un plan articulado de respuesta y contención. Por ejemplo, los confinamientos o cuarentenas deben decretarse con fundamento epidemiológico, estableciendo unos límites que no sean difusos en la práctica, con una regulación específica y sencilla que facilite su conocimiento y su cumplimiento, con capacidad real para romper las cadenas de contagios.

En cuanto a estrategias para responder con menor intensidad a la pandemia, todos los gobernantes deben convencerse de que relajar las medidas de prevención y contención no es una alternativa. Como se dice en el Memorándum John Snow, la idea de alcanzar la inmunidad dejando que la población se infecte constituye una falacia no basada en pruebas científicas. Por otra parte, carece de viabilidad aislar a la población de mayor riesgo, mayores, personas con discapacidad y otros. SESPAS apoya el Memorándum John Snow y reconoce, al mismo tiempo, que visiones legítimamente diferentes no han de impedir llegar a consensos de expertos adaptados a cada situación.

Por otro lado, no se trata de poner la economía en un lado de la balanza y la salud en el otro, como erróneamente defienden los responsables de algunas Comunidades Autónomas, sino de un equilibrio mucho más complejo. No tomar medidas duras de respuesta y contención para salvar la actividad económica es una estrategia condenada al fracaso. Los países que tienen más infectados, hospitalizados y fallecidos son los que también tienen peor comportamiento económico. La economía no se recuperará hasta que consumidores e inversores no recobren la confianza gracias a una disminución drástica de las infecciones y la percepción de que las medidas gubernamentales son coherentes. Podemos tomar ejemplos de países como China, Corea o Taiwán y adaptarlos a nuestro entorno, buscando medidas tempranas y firmes que ahora darían fruto en términos de actividad económica que repunta e inversiones que retornarían. El propio FMI ha dejado claro que para la economía es mejor tomar medidas decididas y eficaces durante un corto periodo que tomar decisiones tibias y menos eficaces que prolongan la pandemia y aumentan la morbilidad y la mortalidad.

Repercusiones en salud, desigualdades sociales, sobrecarga emocional y agotamiento laboral de profesionales producidas por la inadecuada respuesta a la pandemia por parte de las autoridades

Estas malas respuestas a la pandemia están incrementando todavía más las dificultades para atender a los pacientes que sufren otras patologías distintas de la COVID-19. Existen ya datos sobre la omisión y el retraso de diagnósticos y tratamientos de enfermedades graves, como las oncológicas, los infartos de miocardio y los ictus. Las

listas de espera se han disparado y se tienen que posponer numerosas visitas ambulatorias, procedimientos diagnósticos, operaciones quirúrgicas y otros tratamientos. A este panorama se suma la falta de refuerzo de recursos allá donde más se necesita, como es la atención primaria o urgencias.

Además, los efectos de la pandemia, en términos de morbilidad y mortalidad no se distribuyen, en ningún sitio, de forma uniforme, sino que son los grupos más vulnerables (por su nivel socioeconómico, ancianos, con enfermedades concomitantes...) los más afectados. La desigualdad en todas sus dimensiones se agrava por causa de las malas políticas de respuesta.

De manera simultánea, los profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales, como los de residencias de ancianos y personas con discapacidad, policías, comercios de alimentación o transporte público, han estado y siguen estando sometidos a pruebas muy duras, en términos de contagios y fallecimientos, sobrecarga emocional y agotamiento laboral. Las malas políticas de salud pública no permiten superar esta realidad. La prevención y el decidido refuerzo de los profesionales son prioritarios sobre la construcción de nuevas instalaciones